

EE.UU. aprobó la detención de militares

Exigen justicia en caso de jóvenes chilenos quemados

Santiago de Chile. (DPA/PL) - La verdad se conoce y se impondrá, dijo el presidente del Movimiento Democrático Popular, MDP, Germán Correa, refiriéndose a la detención de 25 militares, por su relación con la agresión con fuego a dos jóvenes.

A causa de las quemaduras, influidas el 2 de julio último, murió cinco días más tarde Rodrigo Rojas Denegri, de 19 años, mientras que su acompañante, la estudiante de ingeniería, Carmen Gloria Quintana, de 18, se encuentra aún en gravísimo estado.

La delcaración pública del MDP critica la negativa inicial que el Ejército hizo de su participación en los hechos, y dice que después de tanto que se mintió y se intentó ocultar lo que Chile entero sabía, el régimen ha tenido que reconocerlo.

A su vez, el Séptimo Congreso de Abogados, concluido aquí, aprobó unánimemente un voto que solicita que renuncien a los mandos del ejército.

Los juristas dicen que esa institución armada está construida sobre el principio de la verticalidad del mando que en definitiva es el responsable del crimen.

Los abogados de la Vicaría de la Solidaridad destacaron que en la versión oficial se omitieron importantes detalles de lo sucedido e insistieron en que hay testigos que vieron cuando rociaron con gasolina de la cabeza a los pies a ambos jóvenes.

El padre de una de las víctimas, Carmen Gloria Quintana, desmintió que la muchacha portara material inflamable, como lo asegura la versión del ejército, el

que habría entrado en combustión de manera inexplicable.

"Si así fuera, ¿por qué no los arrestaron y llevaron a un hospital?", preguntó en conferencia de prensa.

Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas Denegri, quien ya retornó a su lugar de exilio en Washington, también preguntó telefónicamente a medios de comunicación nacionales: "¿Por qué los muchachos aparecieron abandonados a 15 kilómetros del lugar?"

Por su parte el Departamento de Estado calificó ayer como "un paso positivo" la detención en Chile de 25 efectivos militares.

Bernard Kalb, vocero del Departamento, dijo que la embajada de Chile informó el viernes al Departamento de Estado que 25 efectivos militares de ese país "han sido puestos a disposición" del juez que investiga el trágico incidente ocurrido el 2 de julio, al inicio de una huelga general de 48 horas, y por el que se acusa a tropas del ejército.

Pero Verónica Denegri, la madre del joven muerto, denunció ayer en una conferencia de prensa aquí que "si el gobierno (chileno) desea descubrir a los realmente responsables, ¿por qué está amenazando, intimidando, siguiendo a los testigos del crimen y a miembros de mi propia familia en Chile?"

Refiriéndose a las detenciones anunciadas por el gobierno chileno, Kalb dijo que es un "paso positivo. Esperamos que contribuirá a una completa e imparcial investigación de este trágico evento. Hay muchas cuestiones a ser develadas. Continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos".

La madre de Rojas dijo a su vez que en Chile "hay miles de otras muertes y atrocidades que no han sido investigadas" y sostuvo que esta "es la primera vez que el ejército ha sido forzado a admitir su complicidad en la muerte de un ciudadano chileno" y que eso se debe a que su hijo era un residente de Estados Unidos.

Por su parte el presidente chileno, general Augusto Pinochet, aseguró ayer que será el pueblo el que, al término de su mandato en 1989, decidirá la continuidad de su régimen militar.

"La Constitución establece que el pueblo determinará si se proyecta la obra de este gobierno, eligiendo un nuevo gobierno con características similares al actual... o elijirá si vuelve o no al caos del año 1973", afirmó el jefe de Estado durante una reunión con ediles de todo el país.

De acuerdo a la carta fundamental, el mandato de Pinochet expira el 11 de marzo de 1989.



Verónica Denegri, madre del joven chileno